



CT/0312/2024

**RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CON MOTIVO DE LA CLASIFICACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN REALIZADA POR EL ÁREA CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA CON NÚMERO DE FOLIO 33001712400588.**

**Antecedentes**

- I. Con fecha 15 de enero de 2024, fue presentada una solicitud de información pública mediante el sistema electrónico denominado Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual le fue asignado el número de folio al rubro citado, misma que se describe a continuación:

**Descripción clara de la solicitud de información.**

"...

*Por este medio me permito, distraer su atención para solicitar información referente a cuántas demandas de personas que han solicitado regresar al régimen décimo transitorio y ahora se encuentran en cuentas individuales, del año 2021 al 2023, de esas mismas cuántas han sido resueltas favorablemente a su petición, y proporcionar 10 demandas y 10 resoluciones por año solicitado, debidamente protegiendo los datos personales de los demandantes. Lo anterior para fines educativos. Agradezco de antemano la atención brindada a la presente*

*..." (sic)*

- II. La Unidad de Transparencia, de conformidad con el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), turnó la solicitud de información pública, a la **Dirección de Incorporación, Recaudación e Inversiones** (en lo sucesivo **DIRI**), y a la **Dirección Jurídica** (en lo sucesivo **DJ**), para que en el ámbito de sus respectivas competencias atendieran la misma.
- III. Con fecha 13 de febrero de 2024, la **DJ**, solicitó la ampliación del plazo de respuesta a la solicitud de información pública, citada al rubro.
- IV. En la misma fecha de 13 de febrero de 2024, el Comité de Transparencia, de conformidad con el artículo 135 de la LFTAIP, así como del Numeral Vigésimo Octavo de los Lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, confirmó la solicitud de ampliación del plazo de respuesta requerido por el área responsable.
- V. Con fecha 16 de febrero de 2023, la **DIRI**, a través de la **Jefatura de Departamento de Integración y Control del Expediente Electrónico**, adscrita a la **Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos**, otorgó respuesta a la solicitud de información pública, misma que en su parte sustantiva refiere lo siguiente:

"...

*Al respecto, se le informa que se realizó búsqueda en los archivos físicos y electrónicos de la Subdirección de afiliación y Vigencia de Derechos, de la Base de Datos única de Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de las áreas correspondientes, sin que se localizaran antecedentes de registro de información con las características y detalles solicitados, lo anterior debido a que si bien esta Unidad Administrativa es la encargada de la ejecución y cumplimiento en los sistemas de modificación de régimen pensionario que, la Unidad Jurídica del Instituto recibe para su aplicación, no obstante, al ser el área encargada de la administración de la Base de Datos Única de*

CT/0312/2024



*Derechohabientes del Instituto, no se lleva un registro de cuantas demandas de personas que han solicitado regresar al régimen décimo transitorio y ahora se encuentran en cuentas individuales, del año 2021 al 2023, de esas mismas cuántas han sido resueltas favorablemente a su petición; por lo que se declara la inexistencia inequívoca de la información solicitada; lo anterior se le informa de conformidad con el artículo 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

*En ese sentido, se informa que esta Subdirección se encarga entre otras facultades de, Normar, establecer, conducir y autorizar los procedimientos en materia de afiliación y para la acreditación de la vigencia de derechos mediante la captación, actualización, sistematización, administración, individualización, transmisión y uso de la información de la Base de Datos Única de Derechohabientes y la administración del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley y el aprovechamiento de las Unidades Administrativas del Instituto encargadas del otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios, como lo establece el Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado fracción VI, numeral 1.2 el cual a la letra refiere:*

#### *1.2 Subdirección y Afiliación de Vigencia.*

*Normar, establecer, conducir y autorizar los procedimientos en materia de afiliación y para la acreditación de la vigencia de derechos mediante la captación, actualización, sistematización, administración, individualización, transmisión y uso de la información de la Base de Datos Única de Derechohabientes y la administración del Sistema Nacional de Afiliación y Vigencia de Derechos, para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley y el aprovechamiento de las Unidades Administrativas del Instituto encargadas del otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios.*

*De la normativa citada, se desprende que esta Subdirección no tiene dentro de sus facultades la de interpretar artículos en la Ley ya que esta es una facultad de los órganos jurisdiccionales.*

*En razón a lo solicitado se informa que resulta aplicable lo dispuesto en el Criterio 03/17 "No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información", emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que precisa:*

*"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 729 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 730, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información."*

*Énfasis añadido*

*De lo anterior, se desprende que esta Subdirección tiene la obligación de proporcionar la información que se encuentre en sus archivos o que esté obligado a documentar de acuerdo con las facultades conferidas, por lo tanto, considerando lo señalado con antelación, esta Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos cumple con informarle que no cuenta con la información solicitada, ya que esta Subdirección se encuentra obligada a garantizar únicamente el acceso a la información con la que cuenta, por lo cual se da cabal cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

CT/0312/2024



En esas condiciones, es conveniente precisar que lo anterior no constituye una restricción al derecho de acceso a la información, puesto que existen elementos suficientes para tener la certeza de que no se cuenta con la información solicitada en los Sistemas de este Órgano Administrativo Desconcentrado.

Asimismo, y del análisis a la normatividad aplicable no se desprende obligación alguna de contar con la información requerida, como es el caso de la información solicitada, por lo que resulta aplicable el Criterio 07/17, emitido por el INAI, que precisa:

"Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados cuando la información solicitada no se encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes que hubiesen realizado la búsqueda de la información. No obstante, lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normatividad aplicable a la materia de la solicitud; además no se tengan elementos de convicción que permita suponer que esta debe obrar en sus archivos, no será necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la inexistencia de la información.

No obstante, lo anteriormente fundado y motivado y aplicando el principio de máxima publicidad, se hacen de su conocimiento la cantidad de aplicaciones de modificación de Régimen de Pensión de Cuentas Individuales a Decimo Transitorio reportadas por el área jurídica del instituto por mandato judicial, mismas que se llevaron a cabo por esta Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos en la Base de Datos única de Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Año	TOTAL
2021	207
2022	166
2023	1051
<b>TOTAL</b>	<b>1424</b>

Ahora bien, es de suma importancia mencionar que los temas respecto a "demandas de personas que han solicitado regresar al régimen décimo transitorio y ahora se encuentra en cuentas individuales, demandas que han sido resueltas favorablemente y resoluciones", es un tema meramente jurídico más no aplicativo, por lo anteriormente fundado y motivado en párrafos que anteceden, de conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los lineamientos que establecen los Procedimientos Internos de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública, esta Unidad Administrativa no es competente para dar respuesta a la presente consulta, por lo que con fundamento en el Artículo 59 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada o en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2023, se le sugiere enviar la presente solicitud a la Subdirección de lo Contencioso dependiente de la Dirección Jurídica.

Lo anterior, de acuerdo con el objetivo y las funciones de la Subdirección de lo Contencioso, marcados en el numeral 6.1 del Manual de Organización General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, numeral 4 de las funciones:

6.1 Subdirección de lo Contencioso Objetivo

CT/0312/2024

**Objetivo**

*Representar jurídicamente al Instituto en las controversias del orden civil, mercantil, laboral, administrativo, fiscal, médico legales, penal y en juicios de amparo, ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales federales y locales, de sus intereses y patrimonio, mediante la presentación de los medios de defensa que prevé la normatividad aplicable.*

**Funciones:**

*4. Dirigir, coordinar y supervisar a las Jefaturas de Servicios en la atención de los procedimientos legales que promueva el Instituto ante la autoridad es administrativas y jurisdiccionales federales y locales;*

*Todo lo anterior se informa en base al Artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.*

*..." (sic)*

- VI.** Con fecha 19 de febrero de 2024, la **DJ**, a través de la **Subdirección de lo Consultivo**, otorgó respuesta a la solicitud de información pública, misma que en su parte sustantiva refiere lo siguiente:

*"...  
Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6.2, función 16 del Manual de Organización General del Instituto, así como en los artículos 3, 6 y 130 párrafo cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 4, 8, y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; me permito dar contestación a la solicitud de información antes referida, en el sentido de informar e interpretar de la manera más amplia el principio de máxima publicidad, que se realizó una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos de esta Dirección Jurídica, por lo cual se manifiesta lo siguiente:*

*Respecto a la solicitud consistente en "referente a cuántas demandas de personas que han solicitado regresar al régimen décimo transitorio y ahora se encuentran en cuentas individuales, del año 2021 al 2023, de esas mismas cuántas han sido resueltas favorablemente a su petición", se informa que, del periodo señalado, se localizó el registro de 3,272 demandas de nulidad, de las cuales, 1,671 cuentan con sentencias en las que se condena al cambio de registro a Décimo Transitorio.*

*Ahora bien, respecto a la petición consistente en "...proporcionar 10 demandas y 10 resoluciones por año solicitado, debidamente protegiendo los datos personales de los demandantes", se anexa dispositivo CD que contiene documentación consistente en las demandas requerida respecto a los años 2021 y 2022, en la que fue clasificada la información considerada como confidencial, en términos del artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual se somete a valoración del Comité de Transparencia, a fin de que confirme la versión publica de los documentos antes referidos.*

*Ahora bien, se hace mención que las versiones públicas de las resoluciones correspondientes a los años 2021 y 2022, se encuentran en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ingresando a la siguiente página:*

<http://sentencias.tfjfa.gob.mx:8080/SICSEJLDOC/faces/content/public/consultasentencia.xhtml>

*Para visualizar la resolución solicitada, deberá ingresar el número de juicio en el recuadro que señala "Buscar texto en documento", tal y como se observa en la imagen que se inserta a continuación:*

**CT/0312/2024**





Consulta de Sentencias Públicas

**Búsqueda**

Buscar por:

**Resultados**

Mostrar resultados por página: 10

Al respecto, a fin de coadyuvar para la atención de la solicitud de información que nos ocupa, esta Dirección Jurídica brinda el número de expediente con el cual se puede tener acceso a las mismas, siendo los siguientes:

No.	Sentencias 2021	Sentencias 2022
1	2257/21-02-01-1	930/22-07-02-2
2	19/21-02-01-1	729/22-07-01-3
3	458/21-02-01-6	840/22-07-01-9
4	2379/21-17-09-2	615/22-02-01-8
5	838/21-02-01-3	3650/22-07-01-5
6	4923/21-07-01-3	5008/22-07-03-7
7	15489/21-17-12-6	5997/22-07-02-1
8	2851/21-04-01-7	2302/22-02-01-8
9	4923/21-07-01-3	4206/22-07-03-1
10	6841/21-07-01-6	611/22-04-01-8

Por otra parte, en cuanto a la documentación correspondiente al año 2023, se informa que no se cuenta con algún asunto que haya causado estado, por lo cual, esta área legal se encuentra impedida para proporcionar la información requerida, toda vez que el brindar la documentación, requerida vulnerar vía la conducción de expedientes judiciales; por tal razón, se somete a consideración del Comité de Transparencia la clasificación íntegra con carácter de reservada de la información y documentación solicitada que se encuentra en posesión del sujeto obligado y que guarda relación con lo solicitado por el peticionario, por un periodo de 5 años, en el marco del fundamento y motivación que se expone a continuación:

En el caso que nos ocupa, se considera que tiene lugar la actualización de las hipótesis previstas en los artículos 113, fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 110, fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señalan lo siguiente:

"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;  
(...)" (Sic)

"LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse o aquello cuya publicación:

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos

CT/0312/2024

*administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;  
(...)" (Sic)*

*Los artículos antes referidos contemplan los supuestos para clasificar como reservada la información que se encuentre en posesión de los sujetos obligados; entre las cuales se señalan, cuando su publicación "afecte los derechos del debido proceso"; y cuando su publicación "vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado "estado", supuestos que este sujeto obligado considera que son aplicables al presente asunto por lo siguiente:*

*Primeramente, se debe entender que los datos solicitados, contienen información de diversos juicios que no han causado estado; por lo que, su publicación afectaría el derecho del debido proceso de las partes involucradas, es decir, del gobernado y de este sujeto obligado, por lo que dicha información no debe ser conocida antes de su presentación en los procesos.*

*Así, la publicación de la información solicitada por el peticionario puede vulnerar la conducción de los juicios y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que están a cargo del sujeto obligado, esto debido a que son asuntos que se encuentran en trámite, es decir, que no han sido resueltos y/o no han causado estado.*

*Apoyándose lo anterior, con los numerales Vigésimo Noveno y Trigésimo del "ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016; en virtud de que las comunicaciones efectuadas a través de los oficios solicitados incluyen información que conforman actuaciones adoptadas para llevar a cabo la debida gestión del procedimiento judiciales, señalándose que, mientras no se haya emitido la resolución definitiva, el otorgar la documentación requerida podría desfavorecer los resultados que se esperan y por tanto los interés del instituto.*

*Los preceptos antes referidos establecen los siguiente:*

*"ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como por lo elaboración de versiones públicas.*

*Vigésimo noveno. De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:*

- I. La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;*
- II. Que el sujeto obligado se aparte en ese procedimiento;*
- III. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y*
- IV. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.*

*Trigésimo. De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:*

**CT/0312/2024**

*I. La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y*

*II. Que la información solicitada se refiere a actuaciones, diligencias o constancias propios del procedimiento.*

*Paro los efectos del primer párrafo de este numeral, se consideró procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:*

*1. Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y*

*2. Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.*

*No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada."*

*En virtud de lo anterior, como ya se hizo mención, resultan aplicables al presente asunto los supuestos de reserva previstos en los artículos 113, fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 110, fracciones X y XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por lo tanto, se procede a la aplicación de la prueba de daño prevista en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a la letra señala lo siguiente:*

#### **"LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

*Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

*I. Lo divulgación de la información representa Un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; y*

*II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda."(sic).*

#### **PRUEBA DE DAÑO.**

*De conformidad con la fracción I del artículo 104 de la Ley General de la materia, se considera que la divulgación de la información solicitada conlleva un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que:*

*La divulgación de la información solicitada representa vulneración irreversible en la debida conducción de cada uno de los juicios que se encuentran a cargo del sujeto obligado, ya que contienen diligencias o actuaciones de los asuntos se encuentran en trámite, es decir, las autoridades jurisdiccionales que conocen de cada uno de ellos no han emitido la resolución definitiva; y en consecuencia, aún no se ha declarado su firmeza; declaración que resulta fundamental para asegurar que dichas determinaciones no podrán ser modificadas o revocadas.*

*Asimismo, la difusión de la información solicitada permitiría que la contraparte tuviera acceso a la información contenida en ellos, la cual es presentada ante los órganos jurisdiccionales competentes, como parte de la defensa de este sujeto obligado, quien se encuentra involucrado en cada uno de los juicios.*

**CT/0312/2024**

*Por otra parte, la difusión de la información podría comprometer la imparcialidad del juzgador, lo cual, conllevaría a la afectación de la esfera personal y jurídica del gobernado, así como, la transgresión al principio constitucional del debido proceso, porque la información con la que se cuenta al momento, al estar bajo el estudio del órgano jurisdiccional que conoce de cada juicio, puede presuponer indicios en contra del interesado e incluso llegar a perjudicarlo en su ámbito personal*

*Resulta aplicable a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial, con número de registro 2005716, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del contenido siguiente:*

*"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro": que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así. en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra lo "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de este Supremo Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noveno Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que /os formalidades esencia/es del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar /os pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde o todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de los que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege o aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza."*

*De acuerdo con la tesis jurisprudencial antes citada, el derecho al debido proceso está conformado por las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento jurisdiccional, identificadas también como formalidades esenciales del procedimiento, las cuales se enumeran a continuación:*

- 1. La notificación del inicio del procedimiento;*
- 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa.*
- 3. La oportunidad de alegar; y*
- 4. Una resolución que dirima las cuestiones debatidas y su impugnación.*

**CT/0312/2024**





*Dichas formalidades esenciales del procedimiento, resultan ser un derecho que toda persona tiene para ejercer su defensa antes de que las autoridades jurisdiccionales competentes modifiquen su esfera jurídica definitivamente.*

*En ese entendido, al revelarse los datos solicitados por el peticionario, se estarían violentando las formalidades esenciales del procedimiento que conforman el debido proceso; toda vez que, se insiste, la publicación de la información solicitada puede presuponer indicios en contra del gobernado y perjudicarlo en su esfera jurídica.*

*Por tal, la finalidad de la reserva de la información es el lograr de manera eficaz el mantenimiento de los procesos jurisdiccionales en todas sus etapas, específicamente por cuanto a la sana e imparcial integración de los expedientes que guardan relación con cada uno de los juicios que están a cargo del sujeto obligado, desde su apertura hasta su total solución (que haya causado estado); además que el contenido de los asuntos únicamente deben ser de acceso para las partes que están involucradas en cada uno de los asuntos, como lo son, el gobernado; este sujeto obligado; y del juzgador, quien debe velar siempre por el correcto equilibrio del proceso, evitando cualquier injerencia externa que por mínima que sea suponga una alteración a ese esquema y a la objetividad que rige su actuación*

*Por tanto, de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 104 de la citada Ley General, el riesgo de perjuicio supera el interés público general de que se difunda, pues el contenido de los documentos emitidos por el sujeto obligado podría utilizarse para entorpecer u obstruir el trámite de dichos juicios, así como, de la emisión de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicten.*

*Aunado a lo anterior, las autoridades jurisdiccionales que conocen de cada uno de los juicios que se encuentran a cargo del sujeto obligado pueden ser sujetas de presiones indebidas por parte de terceros ajenos al procedimiento, pudiendo comprometer o condicionar formal y materialmente el resultado de su actuación; por lo que deben clasificarse en su totalidad los datos solicitados, tomando en cuenta que se considera reservada la información relativa a aquellas actuaciones y diligencias propias del juicio, que al divulgar la información causaría un daño a la seguridad jurídica del gobernado, y para evita con ello la violación al debido proceso, en detrimento de la actuación de los jueces o magistrados en un marco de libertad, objetividad e imparcialidad.*

*Por lo que, de conformidad con la fracción III, del artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio; en tanto que, el principio de proporcionalidad establece la obligación del sujeto obligado de tratar sólo aquellos datos personales que resulten necesarios, adecuados y relevantes en relación con las finalidades para las cuales se obtuvieron; y la reserva solicitada tiene por objeto salvaguardar la información contenida en los oficios requeridos, ya que contienen datos personales sensibles, que de divulgados podrían conllevar un riesgo grave en la esfera más íntima de su titular.*

*Bajo ese orden de ideas, resulta procedente la clasificación de la información solicitada, toda vez que de conformidad con lo anteriormente expuesto, se acreditan los supuestos señalados en el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, atendiendo al hecho de que la publicación de los documentos que nos ocupan, representa un riesgo real, demostrable e identificable; el cual supera el interés público general de que se difunda; y la limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo posible para evitar el perjuicio.*

*..." (sic)*

Al respecto, la **DJ**, a través de la **Subdirección de lo Consultivo**, puso a disposición los siguientes documentos:

CT/0312/2024

- **Versiones públicas** de demandas del periodo 2021 y 2022.

### Considerandos

1.- El Comité de Transparencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es competente para confirmar la clasificación de confidencialidad de la información realizada por la **DJ**, a través de la **Subdirección de lo Consultivo**, de conformidad con los artículos 64, 65, fracción II, 113, primer párrafo, fracción I y 118 de la LFTAIP.

2.- En relación con la clasificación de confidencialidad de la información la **DJ**, a través de la **Subdirección de lo Consultivo**, el artículo 97 de la LFTAIP, dispone lo que a continuación se transcribe:

*“Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.  
(...)”*

*Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley.”*

3.- La **DJ**, a través de la **Subdirección de lo Consultivo**, pone a disposición la siguiente información:

- **Versiones públicas** de demandas del periodo 2021 y 2022.

4.- Los datos confidenciales omitidos en las **versiones públicas** puestas a disposición fueron los consistentes en: **CURP, número de credencial de elector, número de folio, número de empleado nombres, dirección, correo electrónico y cédula profesional, todo lo anterior de terceras personas.**

La clasificación de la confidencialidad de los datos anteriormente señalados es con motivo de que éstos contienen información exclusiva de sus titulares, la cual no puede ser publicada sin su consentimiento previo, pues en caso contrario se vulnerarían datos personales y esfera jurídica de las personas relacionadas con la entrega de la información.

Lo anterior guarda sustento en el Criterio de Interpretación para Sujetos Regulados, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con clave de control PP/001/2023, el cual define la protección de datos personales como un medio para garantizar la privacidad y la autodeterminación informativa, en los términos siguientes:

*“Protección de datos personales. Es un derecho humano que tiene estrecha relación con la vida privada. Si bien la protección de datos personales ha sido reconocida en México como un derecho fundamental independiente de la protección a la vida privada y el honor, siguiendo el ejemplo de otros planos regionales y nacionales en la protección de los derechos humanos, no puede interpretarse de manera radicalmente aislada a la protección de la vida privada, sino que se encuentran en estrecha relación, lo que implica la protección de datos personales como un medio para garantizar la privacidad y la autodeterminación informativa.”*

Bajo esa misma premisa, sirve traer a colación la tesis 1a. VII/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro “*Información Confidencial. Límite Al Derecho De Acceso A La Información (Ley Federal De Transparencia Y Acceso a La Información Pública Gubernamental)*”, la cual en la parte medular dispone que en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el derecho de acceso a la información, el cual puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales.

CT/0312/2024

En dicho precepto constitucional sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, remite a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. De tal suerte que en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada.

En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la vida privada y los datos personales, se estableció como criterio de clasificación el de información confidencial, el cual restringe el acceso a la información que contenga datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización. Lo anterior también tiene un sustento constitucional en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, el cual reconoce que el derecho a la protección de datos personales -así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos- debe ser tutelado por regla general.

Por todo lo expuesto hasta aquí, la clasificación de confidencialidad de la información eliminada tiene fundamento en los artículos 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en lo sucesivo LGPDPPSO); 108, 113, primer párrafo, fracción I, así como el 118 de la LFTAIP, los cuales se transcriben para mayor referencia

**LGPDPPSO.**

**“Artículo 3.** Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
(...)

**IX. Datos personales:** Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.  
...”

**LFTAIP.**

**“Artículo 108.** Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.”

**“Artículo 113.** Se considera información confidencial:

**I.** La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;  
...”

**“Artículo 118.** Cuando un documento o expediente contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados a través de sus áreas, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su clasificación, en términos de lo que determine el Sistema Nacional.”

También resultan aplicables los numerales Segundo, fracción XVIII, Trigésimo Octavo, primer párrafo, fracciones I y II, y Quincuagésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información (en lo sucesivo Lineamientos).

**CT/0312/2024**



**"Segundo.** Para efectos de los presentes Lineamientos Generales, se entenderá por:  
(...)

**XVIII. Versión pública:** El documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia."

**"Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;  
..."

**"Quincuagésimo sexto.** La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia."

En atención a lo establecido en los preceptos transcritos, la información concerniente a una persona física, que pueda vulnerar o evidenciar su intimidad y patrimonio constituyen datos que están clasificados como confidenciales.

Por lo anterior, considerando un documento con partes o secciones confidenciales, este Instituto, como sujeto obligado, a través de sus Unidades Administrativas, deberá elaborar una Versión Pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Para ello, se entenderá como versión pública al documento a partir del que se otorga acceso a la información, en el que se testan partes o secciones clasificadas, indicando el contenido de éstas de manera genérica, fundando y motivando la reserva o confidencialidad, a través de la resolución que para tal efecto emita el Comité de Transparencia.

Bajo esa premisa, el Comité de Transparencia deberá confirmar la confidencialidad de los datos contenidos en la documentación puesta a disposición por el área responsable y aprobar las versiones públicas.

**5.-** El Comité de Transparencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es competente para confirmar la clasificación de reserva de la información realizada por la **DJ**, a través de la **Subdirección de lo Consultivo**, de conformidad con los artículos 64, 65, fracción II, 110, primer párrafo, fracciones, X y XI de la LFTAIP.

**6.-** La **DJ**, a través de la **Subdirección de lo Consultivo**, argumenta y funda la acreditación de la reserva de la información respecto a las 10 demandas y 10 resoluciones del periodo 2023, referidas por la persona solicitante.

Lo anterior es así, con motivo de que la información susceptible de clasificarse como reservada, está relacionada con datos de diversos juicios y procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que no han causado estado; por lo que su publicación afectaría el derecho del debido proceso de las partes involucradas, es decir, del gobernado (demandante o solicitante) y de este Instituto, por lo que dicha información no debe ser conocida antes de su presentación en los procesos.

Por tanto, la divulgación de los datos solicitados representa una vulneración irreversible en la debida conducción de cada uno de los juicios y procedimientos administrativos que se llevan en forma de juicio,

CT/0312/2024

ya que contienen diligencias o actuaciones que la Subdirección de lo Contencioso ha realizado para la substanciación y defensa del Instituto; además de que dichos asuntos se encuentran en trámite, es decir, las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas que conocen de cada uno de ellos no han emitido la resolución definitiva; y en consecuencia, aún no se ha declarado su firmeza; declaración que resulta fundamental para asegurar que dichas determinaciones no podrán ser modificadas o revocadas.

Aunado al hecho de que la difusión de la información podría comprometer la imparcialidad del juzgador, lo cual, conllevaría a la afectación de la esfera personal y jurídica del gobernado (demandante). así como, la transgresión al principio constitucional del debido proceso, porque la información con la que se cuenta al momento, al estar bajo el estudio del órgano jurisdiccional que conoce de cada juicio, puede presuponer indicios en contra del interesado hasta llegar a perjudicarlo en su ámbito personal.

Por lo expuesto con anterioridad, este órgano Colegiado considera viable la clasificación de reserva de la información, referida por el área responsable.

Por tanto, la clasificación de reserva de la información referida en párrafos que preceden tiene fundamento en los artículos 113, primer párrafo, fracciones X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); así como el artículo 110, primer párrafo, fracciones X, XI de la LFTAIP, el cual establece lo siguiente:

**LGTAIP.**

**Artículo 113.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

(...)

**X.** Afecte los derechos del debido proceso;

**XI.** Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

..."

**LFTAIP.**

**Artículo 110.** Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

(...)

**X.** Afecte los derechos del debido proceso;

**XI.** Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

..."

Por lo anteriormente señalado, los sujetos obligados clasificarán la información en el momento en el cual se reciba una solicitud de acceso a la información. De manera particular, en la LGTAIP, así como en la LFTAIP, se establecen las causales por las cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada información que se encuentre bajo su resguardo.

Asimismo, la clasificación de la reserva de la información se robustece y sustenta con el numeral, Vigésimo Noveno y Trigésimo de los Lineamientos, de conformidad con lo siguiente:

**CT/0312/2024**



**“Vigésimo noveno.** De conformidad con el artículo 113, fracción X de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido proceso al actualizarse los siguientes elementos:

- I.** La existencia de un procedimiento judicial, administrativo o arbitral en trámite;
- II.** Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento;
- III.** Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso, y
- IV.** Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso.

**“Trigésimo.** De conformidad con el artículo 113, fracción XI de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, siempre y cuando se acrediten los siguientes elementos:

- I.** La existencia de un juicio o procedimiento administrativo materialmente jurisdiccional, que se encuentre en trámite, y
- II.** Que la información solicitada se refiera a actuaciones, diligencias o constancias propias del procedimiento.

Para los efectos del primer párrafo de este numeral, se considera procedimiento seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrativo, pero materialmente jurisdiccional; esto es, en el que concurran los siguientes elementos:

- 1.** Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima una controversia entre partes contendientes, así como los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepare su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, y
- 2.** Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

No serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se concluya el mismo. En estos casos deberá otorgarse acceso a la resolución en versión pública, testando la información clasificada.  
(...)”

**7.- La DJ,** a través de la **Subdirección de lo Consultivo**, señaló un periodo de reserva de la información por el término de **5 años**, mismo que tiene fundamento en el artículo 104, de la LGTAIP, el cual se transcribe para pronta referencia:

#### **LGTAIP**

**“Artículo 104.** En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

- I.** La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;
- II.** El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
- III.** La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio”

Robustece lo anterior, lo dispuesto por el numeral Trigésimo Tercero de los Lineamientos, el cual se transcribe para pronta referencia:

**“Trigésimo tercero.** Para la aplicación de la prueba de daño a la que hace referencia el artículo 104 de la Ley General, los sujetos obligados atenderán lo siguiente:

**CT/0312/2024**

- I. Se deberá citar la fracción y, en su caso, la causal aplicable del artículo 113 de la Ley General, vinculándola con el Lineamiento específico del presente ordenamiento y, cuando corresponda, el supuesto normativo que expresamente le otorga el carácter de información reservada;*
- II. Mediante la ponderación de los intereses en conflicto, los sujetos obligados deberán demostrar que la publicidad de la información solicitada generaría un riesgo de perjuicio y por lo tanto, tendrán que acreditar que este último rebasa el interés público protegido por la reserva;*
- III. Se debe de acreditar el vínculo entre la difusión de la información y la afectación del interés jurídico tutelado de que se trate;*
- IV. Precisar las razones objetivas por las que la apertura de la información generaría una afectación, a través de los elementos de un riesgo real, demostrable e identificable;*
- V. En la motivación de la clasificación, el sujeto obligado deberá acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar del daño, y*
- VI. Deberán elegir la opción de excepción al acceso a la información que menos lo restrinja, la cual será adecuada y proporcional para la protección del interés público, y deberá interferir lo menos posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información."*

Al respecto, este Órgano Colegiado, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, considera procedente el período señalado para la reserva referida. De esta manera, se cumple con lo establecido en el artículo 100 de la LFTAIP, el cual señala lo siguiente:

**"Artículo 100.** *Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fijar un plazo de reserva."*

En consecuencia, este Órgano Colegiado considera que fue agotado el procedimiento establecido en el artículo 140 de la LFTAIP, mismo que es citado para mayor precisión:

**"Artículo 140.** *En caso de que los sujetos obligados consideren que los Documentos o la información requerida deban ser clasificados, deberá seguirse el procedimiento previsto en el Capítulo I del Título Séptimo de la Ley General, atendiendo además a las siguientes disposiciones:*

*El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:*

- I. Confirmar la clasificación;*
- II. Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la información, y*
- III. Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.*

*El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.*

*La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 135 de la presente Ley."*

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 67, primer párrafo, 68 y 69 del Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de enero de 2023; así como los artículos 3, fracción IX, de la LGDPPSO; 104, 113, primer párrafo, fracciones, X, y XI de la LGTAIP; 64, 65, fracción II, 97, 100, 108, 110, primer párrafo, fracciones, X y XI, 113, primer párrafo, fracción I, 118, 133 y 140 de la LFTAIP; y los numerales Segundo, fracción XVIII, Vigésimo Noveno, Trigésimo, Trigésimo Tercero, Trigésimo

**CT/0312/2024**



Octavo, primer párrafo, fracción I, y Quincuagésimo Sexto, de los Lineamientos, este Comité de Transparencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emite la siguiente:

### Resolución

**PRIMERO.** - Se confirma la clasificación de confidencialidad de la información y se aprueban las **versiones públicas** realizadas por la **DJ**, a través de la **Subdirección de lo Consultivo**, en términos del considerando 4 de la presente resolución.

**SEGUNDO.** - Se confirma la clasificación de reserva de la información realizada por la **DJ**, a través de la **Subdirección de lo Consultivo**, en términos de lo señalado en el considerando 6 de la presente resolución.

**TERCERO.** - Se confirma el periodo de reserva de la información por el término de **5 años**.

**CUARTO.** - Póngase a disposición de la persona solicitante la información remitida por el área responsable.

**QUINTO.-** Se hace del conocimiento de la persona solicitante que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146, 147 y 148 de la LFTAIP, podrá interponer por sí mismo o a través de su representante legal, recurso de revisión en contra de la presente resolución ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o la Unidad de Transparencia del ISSSTE, dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva.

**SEXTO.** - Publíquese la presente resolución en el sitio de Internet de esta Entidad.

**SÉPTIMO.** - NOTIFÍQUESE a la persona solicitante mediante la vía elegida por ésta al presentar la solicitud de información pública anexando copia de la presente resolución.

Así lo resolvieron, por unanimidad, los integrantes del Comité de Transparencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el 27 de febrero de 2024.

**Laura Luisa Dorantes Sánchez**

Titular de la Unidad de Transparencia  
y Presidenta del Comité de Transparencia

**Edgar Darío Ordoñez Hernández**

Firma en suplencia del Titular del Órgano  
Interno de Control, designado mediante  
acuerdo del Comité de Transparencia  
ACT/06/2022 de fecha 31 de mayo de 2022

**Carlos Alberto Islas González**

Coordinador de Archivos

JGR/LECP

CT/0312/2024